

Artículo para Temas. Publicado en Octubre 2012

Daños a la escuela pública

José Ignacio Wert, en tan poco tiempo famoso ministro de Educación, podría haber concitado la piedad de la comunidad educativa si no fuese por su arrogancia, un tanto teñida de cinismo. En la historia reciente de la educación a no pocos ministros les ha tocado bregar con restricciones presupuestarias, y encima tener que disimularlas en aras de la solidaridad gubernamental, pero a ninguno se le ha encomendado la tarea de recortar el gasto en educación de forma tan brutal. Dado que a todo ministro se le supone mínimamente encariñado con la parcela de gobierno que asume, se podría haber esperado del ministro, no que llorase al anunciar los recortes, como lo hizo recientemente aquella ministra italiana en una coyuntura parecida, sino que por lo menos se mostrase apesadumbrado. Pero es el caso que no lo hizo, ni lo primero ni lo segundo, sino que de forma prepotente trató de convencer a la opinión pública de que las medidas adoptadas para reducir el gasto público en educación en nada redundaban, o tenían que ver, con un posible deterioro de la calidad de la enseñanza en general y de la escuela pública en particular.

La argumentación que disocia recortes drásticos y deterioro de la calidad de la enseñanza no es, sin embargo, de la autoría del ministro. Figura nada más ni nada menos que en la exposición de motivos del Real-Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, donde literalmente se dice."En materia de educación, el objetivo común perseguido es proporcionar a las administraciones educativas un conjunto de instrumentos que permitan conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su ineludible reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público". De lo que se infiere que tantos ministros y ministras de educación anteriores, incluidos Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, bien podrían haberse dedicado a contraer el gasto en educación en aras de mejorar la calidad y la eficiencia del sistema educativo en vez de despilfarrar innecesariamente recursos públicos.

El problema es que detrás de lo que parece una broma pesada, que sin duda hubiese encantado al ministro de propaganda del III Reich, lo que se oculta son graves amenazas para el futuro de la escuela pública. Porque es cierto que en una situación económica tan grave como la que atravesamos la escuela pública podría haber sido objeto de recortes presupuestarios de una intensidad igual o parecida impuestos por un gobierno socialista o una coalición de izquierdas, pero también lo es que esas restricciones, que

inevitablemente afectarán a la calidad de la enseñanza, dado que no se pueden hacer recortes tan drásticos sin perjudicar al alumnado, se hubiesen aplicado con carácter temporal , coyuntural y provisional y desde luego sin amenazar el futuro de la institución.

El que las mismas o parecidas medidas tomadas por los populares o los socialistas supongan igual o parecido deterioro inmediato de la calidad de la escuela pública no requiere argumentación .Lo que si la requiere es que solo los populares amenacen el futuro de la escuela pública y no lo hagan los socialistas.

Como hemos manifestado reiteradas veces desde el Colectivo Lorenzo Luzuriaga la escuela pública no solo viene estando amenazada sino que está siendo objeto de ataques directos por parte de los populares en dos comunidades autónomas bien emblemáticas, la de Madrid y la valenciana, comunidades en las que la escuela concertada y la privada han gozado de forma descarada el apoyo negado a la pública. Afirmábamos también que estas políticas tenían un profundo trasfondo ideológico. Para desgracia nacional y de la escuela pública la derecha española no comparte con la derecha europea y la de los países de la OCDE su compromiso decidido con una escuela pública integradora en lo social, lo cultural y lo territorial. Nuestra derecha, no tenemos otra, es heredera de la tradición educativa nacional -católica. Su modelo de escuela, que no oculta, es la escuela privada, mejor subvencionada que concertada. Cuando Rajoy defiende la libertad de enseñanza, el derecho a la elección de centro docente y la llamada escuela de iniciativa social, recibe todos los plácemes de la Conferencia Episcopal española porque esa es la forma velada de defender el principio de subsidiariedad del Estado en la provisión de educación, un principio que condena a la escuela pública a una existencia marginal y residual.

Con esta ideología reinante en el gobierno de la nación y en los de la inmensa mayoría de los de las comunidades autónomas no es de extrañar la insensibilidad con la que se han acometido los recortes contra la escuela pública. Ha llegado hasta dar la impresión de que el PP aprovechaba la ocasión para ajustar cuentas con una escuela, un profesorado y un movimiento asociativo de padres y madres de alumnos que siempre le han molestado. De ahí que una crisis económica prolongada pero sobre todo una prolongada permanencia del PP en el gobierno puedan producir al núcleo duro de la escuela pública daños de muy difícil reparación .Eso a medio y largo plazo, porque los daños que pueda sufrir el alumnado en los próximos años en aulas sobrecargadas y sin los profesores necesarios serán de imposible reparación.

En estas circunstancias, como si no hubiese pasado nada, como si el gasto público en educación no hubiese sufrido el peor retroceso de su historia, el ministro Wert emprende la elaboración de un anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa que pasa por alto cualquier intención de restablecer en el futuro la situación anterior. La única línea conductora del proyecto es la de incrementar el carácter selectivo del sistema educativo, desde la educación primaria en adelante, sin tener en cuenta que la selectividad en la educación obligatoria solo es justa, y en consecuencia admisible, si se ponen todos los recursos necesarios para atenuar sus efectos sociales. Frente a ese !Sálvese quien pueda! de la derecha educativa, la izquierda ha esgrimido siempre el principio de !Salvemos a todos los que podamos !

Como se ha indicado las medidas adoptadas por el PP inferirán daños irreparables en el corto plazo, a los que se añadirán los que se produzcan si llega a entrar en vigor la ley anunciada. Evidentemente la única forma de minimizarlos pasa por la más pronta salida del PP del gobierno. Entretanto bien podría dedicarse la ciudadanía a reflexionar sobre dos instituciones a cuyo uso y disfrute nos habíamos acostumbrado y que súbitamente han sido cuestionadas, la escuela y la sanidad públicas. Olvidando el esfuerzo colectivo que supuso su extensión universal, trabajadores y pacientes de esta, y profesores, padres y alumnos de aquella, quizás no las hayamos cuidado como merecen ni hecho todo lo posible para mejorarlas.

José Torreblanca .Colectivo Lorenzo Luzuriaga